

## EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### TABLA DE CONTENIDO

Referencia: NUE 2-0-2018 (CO)

No.	DOCUMENTO	FECHA	# FOLIO
1	Auto de inicio procedimiento oficioso	13-07-2018	1-2
2	Notificación	16-07-2018	3
3	Informe de defensa + anexos	24-07-2018	4-22
4	Auto declarando caducidad	23-05-2019	23-26
5	Notificación	6-06-2019	27
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

NUE 2-O-2018 (CO)

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA:** San Salvador, a las diez horas con ocho minutos del trece de julio de 2018.

En el procedimiento con referencia NUE ACUM 55, 82, 91, 98, 162, 173, 192 y 257-A-2016, se emitió una resolución en la que se ordenó la entrega de la información consistente en: copia del examen, análisis o dictamen realizado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, a la declaración patrimonial que con base a lo dispuesto en el Art. 240 de la Constitución, presentaron: i) el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) **Enrique Molins Rubio**, los años 1995 y 2004; ii) el ex presidente del INDES **Jorge Hernández Issusi** entre los años 2004 y 2009; iii) el ex presidente del INDES **Jaime Alberto Rodríguez Jiménez** (sic), entre los años 2009 y 20015; y, iv) el ex presidente del INDES **Jorge Pérez Quezada** en los años 2014 y 2015 respectivamente; v) el ex alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán, período 2012-2015, **Nayib Armando Bukele Ortiz**; vi) el doctor **José Belarmino Jaime**, atinentes a su ejercicio como Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el período 2009 al 2012; vii) **Ana Vilma Albanez de Escobar**, atinentes a su ejercicio como Vicepresidenta de la República de El Salvador, cargo que desempeñó durante el período comprendido del 1 de junio del año 2004 al 31 de mayo del año 2009; viii) **Carlos Quintanilla Schmith**, atinentes a su ejercicio como Vicepresidente de la República de El Salvador, cargo que desempeñó durante el período comprendido entre el 1 de junio de 1999 al 31 de mayo de 2004; y, ix) **Luis Mario Rodríguez**, atinentes a su ejercicio como Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, cargo que desempeñó entre junio de 2004 a enero de 2008; x) **José Domingo Méndez**, atinentes a su ejercicio como Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el período 1994-1997; xi) **Nicola Ernesto Angelucci**, ex Presidente del Banco Multisectorial de Inversiones; xii) la declaración patrimonial de toma de posesión y cuando dejó el cargo de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, período 2010 al 2015, **Marina de Jesús Marengo de Torrento**, **Tito Edmundo Zelada Mejía**, **Santos Cecilio Treminio Salmerón**, **Alcides Salvador Funes Teos**, **Manuel Francisco Martínez**, **Luis Enrique Campos Díaz** y **Jorge Alfonso Quinteros Hernández**.

Asimismo, en el procedimiento de referencia NUE ACUM. 330-A-2016, 72 al 74, 94 y 99. A-2017, se emitió una resolución definitiva en la que se ordenó a la **Corte Suprema de Justicia**

(CSJ), por medio de la **Sección de Probidad** que elabore un Plan en el que se establezcan los plazos en los que se practicaran las auditorias de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios públicos: i) de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, período 2009-2014; ii) de los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa periodo 2012-2015; iii) del cargo del gabinete de gobierno del periodo presidencial 2009-2014; iv) de los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa periodo mayo 2009 a mayo 2012; y, v) de los diputados propietarios y suplentes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), periodo de octubre 2011- octubre 2016.

Este Instituto advierte que el 9 de agosto de 2017, se recibió un informe en el que se pretendió justificar el incumplimiento de la resolución referencias NUE 55, 82, 91, 98, 162, 173, 192 y 257-A-2016, y se adjuntó un memorandúm en dónde no se establece el cumplimiento a la resolución sino una votación del Pleno de la CSJ. Con relación al segundo procedimiento, hasta la fecha no se ha remitido ningún informe de cumplimiento, a pesar de haber sido debidamente notificados y haberse resuelto los respectivos recursos interpuestos por la **CSJ**. Asimismo, este Instituto ha verificado que en sendos fallos la responsabilidad de cumplir con lo ordenado y satisfacer el derecho de acceso a la información recae en el servidor público responsable de dirigir la Sección de Probidad, es decir, el licenciado **Carlos Rafael Pineda Melara**.

En consecuencia, este Instituto considera que el licenciado **Carlos Rafael Pineda Melara** puede haber incurrido en la causal del art. 76 “infracciones muy graves”, letra “c” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual establece que serán infracciones muy graves: no proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por este Instituto y, por lo tanto, corresponde abrir el presente procedimiento sancionatorio en contra del servidor público enunciado

En este sentido y de conformidad con lo antes expuesto, y con base en los artículos 6 y 18 de la Constitución de la República, 76 en las infracciones leves, literal “c”, 86 y 87 de la LAIP, 78 del RELAIP, este Instituto **resuelve**:

a) **Dar inicio** oficioso al procedimiento administrativo sancionatorio en contra de **Carlos Rafael Pineda Melara**, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por el posible cometimiento de la causal establecida en el art. 76 infracciones muy graves, letra “c” de la LAIP.

2

b) **Designar** al comisionado **Carlos Adolfo Ortega Umaña** para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la admisión de este recurso, dé trámite al procedimiento, forme el expediente, recabe pruebas y elabore un proyecto de resolución que someterá al pleno de este Instituto.

c) **Requerir** a **Carlos Rafael Pineda Melara** que, de manera personal, dentro del plazo de **siete días hábiles** contados a partir de la notificación respectiva, rinda el informe a que se refiere el artículo 88 de la LAIP, ofreciendo los medios probatorios que considere pertinentes para fundamentar su defensa.

d) **Hacer saber** a **Carlos Rafael Pineda Melara** que las resoluciones de este Instituto se le notificarán por medio de su correo electrónico, por lo que deberá señalarlo para tal efecto y acusar de recibido dentro de las veinticuatro horas siguientes después del envío; caso contrario, toda resolución se le notificará por cartelera o tablero. Asimismo, deberá indicar, por lo menos, un número de teléfono al cual pueda contactársele.

e) **Hacer saber** a **Carlos Rafael Pineda Melara**, que toda la documentación presentada a este Instituto por medios electrónicos debe ser remitida a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv; y, en el caso de los documentos que acrediten personería, deberán ser remitidos en original.

f) **Notificar** esta resolución a **Carlos Rafael Pineda Melara** en la Sección de Probidad, ubicada en el edificio administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dejándose constancia impresa, en todos los casos, de haberse realizado las notificaciones.

Notifíquese.-




**PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS Y LA COMISIONADA QUE LA SUSCRIBEN**



## ESQUELA NOTIFICACIÓN

La infrascrita notificadora del Instituto de Acceso a la Información Pública, **Blanca Xenia Tamayo Quintanilla**. HACE CONSTAR: que a las 11 horas con 08 minutos del día 16 del mes de julio del año 2018, se notificó en legal forma a **Carlos Rafael Pineda Melara** la resolución con referencia **NUE 2-O-2018 (CO)**, de las diez horas con ocho minutos del día trece del mes de julio del año dos mil dieciocho, junto con: n/a en su oficina administrativa, ubicado en **Sección de Probidad, edificio administrativo de la Corte Suprema de Justicia** la cual fue recibida por Carlos Guillermo Quiñero Quintanilla, quien se identifica con su Documento Único de Identidad número \_\_\_\_\_, cuyo cargo es Sub-director de Probidad.

  
Firma de quien la recibe

  
Firma de la Notificadora



## **SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

Por recibida notificación de resolución con referencia NUE 2-0-2018(CO) de fecha 13 de julio de 2018 y recibido en esta oficina el día 18 de julio del corriente año, mediante la cual el IAIP informa que se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio en mi contra por el posible cometimiento de la causal establecida en el art. 76 infracciones muy graves letra “c” de la LAIP. Siguen señalando en la referida resolución, que en el procedimiento con las referencias arriba señaladas, el Instituto emitió resolución en la que ordenó que se entregara a los ciudadanos copia de los exámenes, auditorías y dictámenes realizados a la declaraciones patrimoniales de las siguientes personas: 1- Enrique Molins Rubio, 2- Jorge Hernández Issusi, 3- Jaime Alberto Rodríguez Jiménez, 4- Jorge Pérez Quezada, 5- Nayib Armando Bukele Ortiz, 6- José Belarmino Jaime, 7- Ana Vilma Albanes de Escobar, 8- Carlos Quintanilla Smith, 9- Luis Mario Rodríguez, 10- José Domingo Méndez, 11- Marina de Jesús Marengo Torrento, 12- Tito Edmundo Zelada Mejía, 13- Manuel Francisco Martínez, 14- Luis Enrique Campos Díaz, 15- Jorge Alonso Quinteros Hernández, 16- Nicola Ernesto Angelucci, 17- Nelson Napoleón García, y 18- Levis Italmir Orellana.

Así mismo señalan, que en el procedimiento de referencia NUE ACUM 330-A-2016, 72 al 74, 94 y 99 A-2017, el Instituto emitió resolución definitiva en la que ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CS.J), por medio de la Sección de Probidad que elabore un Plan en el que se establezcan los plazos en los que se practicasen las auditorías de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios públicos: i) de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, período 2009-2014; ii) de los diputados propietarios de Asamblea Legislativa periodo 2012-2015; iii) del cargo del gabinete de gobierno del periodo presidencial 2009-2014; iv) de los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa periodo mayo 2009 a mayo 2012; y, v) de los diputados propietarios y suplentes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN ), periodo de octubre 2011- octubre 2016. Al respecto es necesario hacer las siguientes consideraciones:

OK PLEASE SIGN HERE

**I. La jurisprudencia establecida por Corte Plena en las resoluciones finales de investigación de la información proporcionada por los funcionarios y exfuncionarios públicos en sus declaraciones juradas de patrimonio.** Señalan que: “el Art. 240 Cn en su parte medular prescribe: El Constituyente establece, por una parte, la prevención de enriquecimiento ilícito y, por otra, la obligación, a cargo de los funcionarios que hayan obtenido un enriquecimiento “sin justa causa”, de restituir al Estado o al Municipio todo lo que adquirieron ilegítimamente. Para alcanzar esa finalidad, en el referido artículo se ha establecido un procedimiento que puede dividirse en dos fases: (i) una administrativa; y (ii) otra jurisdiccional.

A. La fase administrativa se encuentra a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se desarrolla en tres momentos básicos:

a. El primero se relaciona con la obligación que tienen los funcionarios y empleados públicos que la ley indique de presentar la declaración de sus bienes al tomar posesión de su cargo y al cesar en su ejercicio. En cuanto a ello, el Constituyente previó que ambas declaraciones deben ser presentadas ante la CSJ.

b. El segundo se refiere a la atribución de la CSJ de “comprobar la veracidad de la declaración” que le ha sido presentada. Para el desempeño de dicha competencia el Constituyente no prescribió –al menos expresamente– otra limitante más que la de mantener “en reserva” la declaración y que ésta “únicamente servirá para los efectos previstos”.

c. El tercero es una consecuencia de los resultados obtenidos al indagar sobre la veracidad de los datos contenidos en la declaración. Así, si los resultados de la aludida comprobación arrojan indicios de enriquecimiento sin causa justificada por parte de un servidor público, procederá la CSJ a ordenar el inicio del respectivo “juicio por enriquecimiento sin causa justa”.

B. La fase jurisdiccional, por su parte, debe ser instada por la CSJ con fundamento en los resultados que proporcione la investigación efectuada a partir de los datos de las declaraciones patrimoniales presentadas por los funcionarios o empleados obligados a ello.

2. A. Ambas etapas se desarrollan de la forma prescrita en la LEIFEP, en conjunto con lo dispuesto en la Ley Orgánica Judicial.

Esta última ley, en su art. 114 establece que las facultades de recibir las declaraciones y de comprobar la veracidad de los datos contenidos en ellas serán ejercidas por la Sección de Probidad, que forma parte de la misma CSJ, dejando incólume la competencia del tribunal para decidir si procede o no el inicio del juicio civil respectivo contra el presunto funcionario responsable. Así, en los ord. 1° y 3° de la mencionada disposición legal se ha prescrito que corresponde al Jefe de la Sección de Probidad: (i) recibir las mencionadas declaraciones –tanto la de toma de posesión del cargo como la de cese de éste–, de conformidad a la LEIFEP; e (ii) informar a la CSJ cuando del examen de las declaraciones aparecieran indicios de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario, para los efectos del art. 9 de la LEIFEP. Esto último, como consecuencia de una actividad de verificación que incluye la solicitud de información a instituciones públicas y a personas u organizaciones privadas, es coherente con lo prescrito en el art. 27 de la LEIFEP, el cual establece que corresponde a la Sección de Probidad de la CSJ velar por el estricto cumplimiento y aplicación de las disposiciones de dicha ley.

**B. En ese sentido, la Sección de Probidad es una especie de órgano instructor para indagar los posibles actos de enriquecimiento ilícito que hayan realizado los funcionarios y empleados públicos al ejercer su cargo, a efecto de que sea la propia CSJ la que decida si procede instar el inicio de un proceso contra el servidor público responsable. En otras palabras, la referida sección es una unidad administrativa cuya función se ejercita en nombre de la CSJ, con lo cual el legislador le ha encomendado el ejercicio de las citadas competencias –de recepción y de comprobación– pero no su titularidad.**

Siguen señalando en dichas resoluciones que cuando del análisis de las declaraciones presentadas por un funcionario o empleado “**el Jefe de la Sección de Probidad encuentre indicios de enriquecimiento sin causa justificada, este debe cumplir con la obligación legal dispuesta en el art. 114 ord. 3° de la LOJ, informando a la CSJ sobre los hallazgos encontrados, a efecto de que esta última decida si ordena el inicio del juicio respectivo.**

Es decir que, concluida la investigación de la Sección de Probidad y presentados sus resultados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LEIFEP, corresponde a la **CSJ determinar si existen indicios de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario o empleado público y, en caso afirmativo, ordenar a la Cámara de lo Civil competente que**



**inicie el juicio civil correspondiente y remitirle la certificación de la información que sustente su conclusión".** En ese contexto, el suscrito como Jefe de la Sección de Probidad le corresponde nada más las atribuciones de recepción de las declaraciones y **su comprobación nada más.**

**II. Teoría del Órgano.** En Derecho Administrativo existe la distinción entre Órgano Institución y Órgano Persona, para indicar que en el primero hay un centro de imputación de atribuciones, y en el segundo un funcionario que lo pone en acción, tomando decisiones en base a las atribuciones asignadas al órgano institución.

Así las cosas, generalmente hay mención en las leyes al órgano institución o al órgano persona. Así para el caso la Ley Orgánica Judicial configura en su Art. 2, la Corte Suprema de Justicia como órgano persona, al señalar que está compuesto por 15 Magistrados y uno de ellos será el Presidente, quien lo es también del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional. Por otro lado, en el Art. 4 se habla de la Corte Suprema de Justicia como Órgano-institución, estableciéndose que está organizada en cuatro salas. A ello también se refiere la Constitución en el Art. 173, al postular que la ley determinará la organización interna de la Corte Suprema de Justicia, de modo que las atribuciones que le corresponden se distribuyan entre las diferentes salas. De igual modo, las atribuciones que se señalan en el Art. 182 de la Constitución, son para el órgano-institución, así como todas las demás a que se refiere la atribución catorceava. Dichas atribuciones se realizan por el órgano persona, al cual se refiere el Art. 50 de la Ley Orgánica Judicial, al señalar que la Corte Suprema de Justicia en Pleno o Corte Plena, estará formada por todos los magistrados que la conforman.

La organización de la Corte Suprema de justicia, institución. Como ya se ha dicho, dentro de la organización de la Corte Suprema de Justicia, existe el órgano Presidencia, en el cual su Presidente se constituyó como órgano persona (Art. 173 inc. 1º Cn). Este órgano institución (Presidencia) a tenor de lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley Orgánica Judicial, es responsable del gobierno y régimen interior de la Corte Suprema de Justicia, como tal tiene las atribuciones a que se refiere el Art. 27 de la misma Ley Orgánica, y dentro de ellas, según lo dispuesto en la atribución segunda llevar la sustanciación de los asuntos de Corte Plena. Así

mismo, el inciso último de la citada disposición faculta al Presidente para delegar en uno o más Magistrados, toda actividad que no implique el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Dicha delegación se hará mediante acuerdo, en el que se determinaran las facultades y el funcionario. Es así que mediante acuerdo de Presidencia número 55-C, de fecha 14 de enero de 2016, el señor Presidente de la CSJ y del órgano Judicial, integró la Comisión de Ética y Probidad, compuesta por los señores Magistrados: Belarmino Jaime, Edward Sidney Blanco, Sergio Luis Rivera, Leonardo Ramírez Murcia y Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, a quienes se les delego las atribuciones de coordinar, revisar, corregir, aprobar y remitir a conocimiento de Corte Plena los casos sustanciados por la Sección de Probidad. Así como los casos a iniciarse. (anexo 1) Posteriormente, en sesión ordinaria de Corte Plena de fecha, cinco de julio de dos mil diecisiete, la Corte Suprema de Justicia en pleno, acepto la renuncia de la Dra. Yanira Sánchez de Muñoz Dafne. (anexo 2)

En ese orden, la facultad para determinar si con los informes realizados por la Sección de Probidad, existen indicios de enriquecimiento ilícito le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, como Órgano Institución, y a los 15 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (como Órgano persona) y al Presidente la titularidad de la misma.

**III. Antecedentes de las entregas en versión pública de las declaraciones juradas de patrimonio.** Fue a partir de la resolución tomada por Corte Plena en el punto de acta número dos de la sesión celebrada el día 28 de julio de 2015, en la cual ordenaron al Jefe de la Sección de Probidad y al Oficial de Información, elaborar una versión pública de la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González Bonilla, suprimiendo los datos confidenciales y privados... y con el mismo criterio y modo de proceder deberán implementarse las solicitudes que con base al derecho de acceso a la información pública hagan o hayan hecho las personas sobre las declaraciones del estado de patrimonio de funcionarios, aunque estos ya hayan cesado de sus cargos. Esto debido la Confidencialidad de las declaraciones juradas de patrimonio. Sobre este punto es de agregar que de conformidad a lo señalado en el Art. 240 inciso 3° de nuestra Constitución, que en su parte medular dice: La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos

previstos en este artículo.(resaltado mío) (*anexo 3*), es decir que únicamente servirá a efecto del inicio del juicio por enriquecimiento ilícito y la investigación de un posible hecho punible.

Aunado a eso, esta lo regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública, relativa a lo no aplicabilidad de dicha ley en otras normativas, art. 110 literal a) de la LAIP no tiene aplicabilidad dicha ley a lo preceptuado en el Art. 6 de la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que, en su parte medular expresa: *“las declaraciones juradas de patrimonio se mantendrán en reserva...”**en ese orden de ideas, las declaraciones juradas de patrimonio está catalogada como información confidencial definida en el art. 6 literal “f” de la LAIP, dado que es información privada cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional.* (Resaltado mio)

Por otra parte, el Principio de Legalidad, señalado en el art. 86 Cn, establece: “que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las expresamente señaladas en la ley”. Es decir, que como ya se expresó anteriormente de acuerdo a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y a Ley Orgánica Judicial, las atribuciones que me competen como Jefe de la Sección de Probidad, se refieren a **la de recepción de declaraciones y la comprobación de las mismas, además como subordinado de los 15 Magistrados de la CSJ, la cual como ya se dijo anteriormente, mediante acuerdo me ordenó que la información que el suscrito podría entregar a la Unidad de Acceso a la Información Pública y por ende al Instituto, son en versión pública las declaraciones juradas de patrimonio.** Por lo antes señalado el Instituto de Acceso a la Información Pública como garante de la Constitución y de la LAIP, mal haría en sancionarme administrativamente, cuando ya se demostró cuáles son las facultades inherentes a mi cargo. En ese orden de ideas, como Jefe de la sección nunca he negado la información que el Instituto a través del Oficial de Información haya solicitado, y en ese sentido vale la pena remarcar que, como parte del organigrama de la CSJ, mi condición es la de ser un subordinado a los 15 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que como se señaló con anterioridad, son los titulares de la misma.

**IV. No obstante lo anterior, de acuerdo con la resolución definitiva en cuestión, la información que se ordena entregar es la siguiente:** los exámenes, auditorías y dictámenes realizados a la declaraciones patrimoniales de las siguientes personas: 1- Enrique Molins Rubio, 2- Jorge Hernández Issusi, 3- Jaime Alberto Rodríguez Jiménez, 4- Jorge Pérez Quezada, 5- Nayib Armando Bukele Ortiz, 6- José Belarmino Jaime, 7- Ana Vilma Albanez de Escobar, 8- Carlos Quintanilla Smith, 9- Luis Mario Rodríguez, 10- José Domingo Méndez, 11- Marina de Jesús Morenco Torrento, 12- Tito Edmundo Zelada Mejía, 13- Manuel Francisco Martínez, 14- Luis Enrique Campos Díaz, 15- Jorge Alonso Quinteros Hernández, 16- Nicola Ernesto Angelucci, 17- Nelson Napoleón García, y 18- Levis Italmir Orellana.

Tal como lo compruebo con la fotocopia del memorándum que presento, con fecha 17 de julio de 2018, esta oficina remitió las resoluciones emitidas por Corte Plena de los siguientes señores: Luis Mario Rodríguez; José Belarmino Jaime; Jorge Alberto Pérez Quezada; Jorge Alfonso Quinteros Hernández; Tito Edmundo Zelada Mejía; Eduardo Antonio Urquilla Bermúdez; Nayib Armando Bukele Ortiz; y, Marina de Jesús Marengo de Torrento ( anexo 4), el caso de las resoluciones de José Domingo Méndez, Luis Enrique Campos Díaz y Levis Italmir Orellana, se anexa copia del acuerdo de Corte Plena de fecha, por medio del cual el pleno de Magistrados que conforman la CSJ, decidieron que no existen indicios de enriquecimiento ilícito en contra de dichos señores, una vez Secretaria General envié las resoluciones con el debido pronunciamiento se enviara a la Unidad de Acceso a la Información Pública institucional ( anexo 5), es decir que ya se cumplió con la entrega de 12 de los 18 dictámenes requeridos. Por otra parte, anexo fotocopia del memorándum por medio del cual remití el informe final del caso de la señora Ana Vilma de Escobar, para que Corte Plena como el ente encargo de acuerdo a la Constitución en su Art. 240 y a leyes de la materia pronuncie la resolución final. (anexo 6)

Además, se adjunta memorando donde su servidor envió a Comisión de Ética y Probidad los informes de los señores Carlos Quintanilla Smith y Jorge Hernández Issusi, (anexo 7), y en el caso del señor Enrique Molins Rubio, se encuentra en la fase de elaboración de informe.

En el sentido descrito únicamente quedan pendientes sustanciar las investigaciones en contra de los señores: Nicola Ernesto Angelucci, y Nelson Napoleón García, la cual se realizará de acuerdo al plan de elaboración de plazos, que por este acto se les entrega.



En razón de lo anterior, se debe enfatizar en que la Sección que administro “de ninguna manera ha negado la información solicitada, sino que he generado un sin número de medidas, a efecto de generar los informes solicitados, tratando de exponer los motivos por los cuales no se puede entregar en los plazos establecidos en las resoluciones emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública, pues existen razones excepcionales, de complejidad y capacidad instalada que impiden que la oficina cumpla de forma expedita con el procesamiento de las auditorías de las declaraciones patrimoniales solicitadas, además de los tiempos de respuesta de las entidades externas consultadas y la programación de agenda por parte de las autoridades máximas.

**V. Tomando en cuenta lo anterior**, resulta necesario hacer algunas acotaciones sobre las circunstancias que justifican –en el presente caso– la imposibilidad de cumplir con el plazo de entrega señalado por el IAIP de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y empleados públicos mencionados por los peticionarios, estas son:

A. En primer lugar, es dable señalar que el 9 de junio del 2005, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia se determinó que las solicitudes de información que afectaren el secreto bancario se acordarían por esta y comunicarían por la Presidencia de la misma, lo cual supuso eliminar la facultad de la Sección de Probidad de requerir información a los entes del Sistema Financiero del país, tal como lo dispone el art. 27 inc. 2° de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), el cual señala que dicha dependencia “... *tendrá potestad de solicitar los informes que fueren necesarios a cualquiera de las instituciones o personas a que se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, quienes estarán en la obligación de cumplir lo requerido*” –*itálicas agregadas*–.

Posteriormente, por acuerdo número 1-P de fecha nueve de enero del dos mil catorce, la actual integración de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que aquella decisión del nueve de junio de dos mil cinco se convirtió en un obstáculo para el cumplimiento del art. 240 de la Constitución de la República, habilitó nuevamente a que la Sección de Probidad pueda realizar directamente las gestiones orientadas a comprobar la veracidad de las declaraciones de

UAIP-NUE-55, 82, 91, 98,162, 173, 192 y 257-A-2016(MV) y NUE ACUM. 330-A-2016, 72  
AL 74, 94 Y 99

patrimonio presentadas por los funcionarios o empleados públicos, y ordenó informar a los bancos y demás instituciones financieras el contenido de dicho acuerdo.

En ese sentido, a partir de tales fechas la labor de auditoría y control de la Sección de Probidad *se vio paralizada en cuanto a sus facultades conferidas en el art. 27 inc. 2° de la LEIFEP, por un periodo aproximado de nueve años, lo cual ha generado una gran cantidad de casos que no se tramitaron en ese lapso y que ha impactado en las gestiones de investigación de cada caso concreto, como consecuencia, el trabajo de la Sección de Probidad se ha visto demorado por una circunstancia ajena a esa misma dependencia.*

B. Otro aspecto a considerar es que a raíz de lo anterior y en virtud de la gran cantidad de casos pendientes de análisis por parte de la Sección de Probidad, la Corte Suprema de Justicia en Pleno mediante sesión de fecha 12 de mayo de dos mil 2016, acordó introducir tres criterios o ejes de prioridad para la selección de los casos de investigación y análisis financieros, a los cuales ha hecho alusión el Subjefe de la aludida unidad en el memorándum relacionado en el prefacio de esta resolución.

Dichos criterios se refieren a que: *i) “...se analizarán preferentemente los casos que estén próximos al vencimiento del plazo para incoar el juicio por enriquecimiento sin justa causa, previsto en el inciso final del artículo 240 de la Constitución de la República. Lo anterior sin perjuicio del deber de informar a la Fiscalía General de la República, para que ejerza las acciones respectivas, tanto de los que se encuentran dentro del referido plazo como de aquellos que hayan prescrito...”; ii) “...deberán de considerarse prioritarios los casos de funcionarios y empleados públicos desde los que tienen mayor responsabilidad dentro de los Órganos de Gobierno hasta la de aquellos que se desempeñan localmente. Incluyendo los funcionarios que manejan fondos públicos, administran o fiscalizan bienes del Estado...”; y iii) “...[c]asos graves y notorios de posible enriquecimiento ilícito: se procederá a investigar el patrimonio de aquellos servidores públicos, en funciones o no, sobre los que se tenga conocimiento por cualquier medio objetivo tales como denuncias de ciudadanos debidamente fundadas, investigaciones confiables y respaldadas de sospechas de enriquecimiento sin justa causa, cuya información provenga de fuentes independiente a la sección de probidad. Lo anterior sin perjuicio del carácter oficioso que corresponde a dicha sección...” (sic).*

En ese sentido, en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se toman en cuenta tales criterios para desempeñar la función que se nos ha delegado por ley.

Por otra parte, tal como se ha señalado, se debe tomar en cuenta que *la carga laboral en la Sección de Probidad, aún y cuando se aplican los aludidos criterios de selección a los que nos hemos referido, ha sobrepasado la capacidad humana y operativa con la que contamos.*

***VI. Limitantes para que esta oficina entregue la información requerida por el Instituto.***

A. Resolución de fecha 20/06/2017 mediante la cual la Corte en Pleno declara la reserva de cierta información proveniente de la Sección de Probidad y,

B. Por otro lado, el acuerdo de Corte Plena de fecha 09/08/2017 en el que se establecen los lineamientos a seguir, en el presente caso, para la entrega que en su momento se haga de la información requerida; de ahí que resulte necesario establecer la forma en que ambos actos decisorios son aplicables al caso en comento.

Según la resolución de Corte en Pleno de fecha 20/06/2017, se declara como información reservada: “... (ii) los antecedentes y deliberaciones (...), únicamente en los casos en que la resolución definitiva que emita la Corte Plena determine que **NO** existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte del funcionario o empleado público investigado”; de ahí que *deba interpretarse que los informes, exámenes o auditorias de las declaraciones patrimoniales de toma y cese en el cargo de funcionarios y ex funcionarios pueden ser entregados en versión pública a los interesados, siempre y cuando ello sea precedido de una resolución de Corte en Pleno en la que se establezca que **SI** existen indicios de enriquecimiento ilícito, lo cual –de conformidad con el acuerdo de fecha 8/08/2017– procederá en el plazo de 15 días hábiles después de que dicho proveído –en el que se establezcan la evidencia de esos ilícitos– haya sido emitido por dicha autoridad, esto es, cuando aquel haya adquirido firmeza y haya sido notificada a los interesados.*

En este punto, se debe insistir que lo anterior no implica una denegatoria de acceso a la información, pues, tal como se ha acotado *supra*, las auditorias en cuestión serán entregadas en los términos mencionados en el párrafo que antecede, en virtud de las circunstancias objetivas, técnicas y capacidad humana a las que se hizo referencia en esta resolución, *pues se*

*insiste en que existen razones excepcionales y de complejidad que impiden que esta sección cumpla de forma expedita con el procesamiento, generación y entrega de la información requerida por los interesados.*

Como consecuencia de lo antes expuesto, cuando la información que ha sido solicitada por los ciudadanos haya sido procesada y generada por la Sección de Probidad y, además, haya sido sometida a la deliberación de la Corte Suprema de Justicia se procederá a la entrega de la misma, en los términos referidos en el acápite precedente.

**VII. Finalmente, en relación a que a la Corte Suprema de Justicia (CS.J), por medio de la Sección de Probidad elabore un Plan en el que se establezcan los plazos en los que se practicaran las auditorías de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios públicos: i) de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, período 2009-2014; ii) de los diputados propietarios de Asamblea Legislativa periodo 2012-2015; iii) del cargo del gabinete de gobierno del periodo presidencial 2009-2014; iv) de los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa periodo mayo 2009 a mayo 2012; y, v) de los diputados propietarios y suplentes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN ), periodo de octubre 2011- octubre 2016. Se adjunta el plan elaborado por la Sección de Probidad para la realización de las auditorias arriba señaladas. Y en relación al NUE 330-A-2016 fue sobreseído parcialmente mediante resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública de fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.**

De conformidad a lo señalado en el art. 90 de la LAIP, propongo como testigo al licenciado Carlos Guillermo Quiteño Quintanilla, sub-jefe de esta sección, para que comparezca a la audiencia oral.

Por lo antes expuesto, les pido:

Se me exoneré del posible cometimiento de la causal establecida en el art. 76 letra "c" de la LAIP, de conformidad a lo establecido en los artículos 86 inciso 2° Cn, 27 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, 114 de la Ley Orgánica Judicial, ya que como se ha demostrado nunca se ha negado la entrega de información,




UAIP-NUE-55, 82, 91, 98, 162, 173, 192 y 257-A-2016(MV) y NUE ACUM. 330-A-2016, 72

AL 74, 94 Y 99

asimismo, remarco que mis atribuciones legales son la de recepción de las declaraciones y las comprobaciones de las mismas.

Señalo para oír notificaciones mi correo electrónico: (

San Salvador veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

  
**Lic. Carlos Rafael Pineda Melara**  
**Jefe Sección de Probidad, CSJ**

Doy fe que la firma que calza al pie del anterior escrito y que se lee: “ilegible”, es auténtica a su original, por haber sido puesta del puño y letra y a mi presencia por el señor Carlos Rafael Pineda Melara, de cuarenta y siete años de edad, abogado, del domicilio de San Marcos y de esta ciudad y de este departamento, portador de su documento único de identidad personal número \_\_\_\_\_ San Salvador, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil dieciocho.





Acto por Pedro Antonio Gonzalez  
Identifica con 7 a las 15.49  
24 de Julio de 2018 Junto con 13 folios





Secretaría General  
Corte Suprema de Justicia  
Tel. 2271-8888

San Salvador, 14 de enero de 2016.

ASUNTO: Transcríbese acuerdo No. 55-C de 8 de enero de 2016.

LIC. EDWARD SIDNEY BLANCO REYES  
PRESENTE

SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE:

""""No. 55-C.---CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, ocho de enero de dos mil dieciséis.---El Tribunal, ACUERDA: integrar las siguientes comisiones, con los Magistrados que a continuación se mencionan:

COMISION DE JUECES

LIC. DORIS LUZ RIVAS GALINDO  
LIC. MARIA LUZ REGALADO ORELLANA  
LIC. ELSY DUEÑAS DE AVILES  
DR. OVIDIO BONILLA FLORES  
LIC. EDWARD SIDNEY BLANCO REYES  
LIC. LEONARDO RAMIREZ MUCIA

COMISION DE MODERNIZACIÓN

LIC. MARIA LUZ REGALADO ORELLANA  
LIC. DORIS LUZ RIVAS GALINDO  
LIC. ELSY DUEÑAS DE AVILES  
DR. FLORENTIN MELENDEZ PADILLA  
LIC. RODOLFO ERNESTO GONZALEZ BONILLA

COMISION DE ABOGACÍA Y NOTARIADO

DR. JOSE BELARMINO JAIME  
DR. OVIDIO BONILLA FLORES  
LIC. RODOLFO ERNESTO GONZALEZ BONILLA  
LIC. JOSE ROBERTO ARGUETA MANZANO  
LIC. SERGIO LUIS RIVERA MARQUEZ

COMISION DE CULTURA

DRA. DAFNE YANIRA SANCHEZ DE MUÑOZ  
DR. FLORENTIN MELENDEZ PADILLA  
LIC. OSCAR ALBERTO LOPEZ JEREZ

COMISION DE ÉTICA Y PROBIDAD

DRA. DAFNE YANIRA SANCHEZ DE MUÑOZ

DR. JOSE BELARMINO JAIME

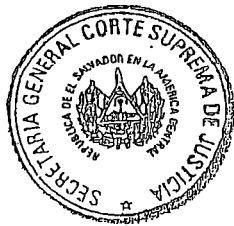
LIC. EDWARD SIDNEY BLANCO REYEZ

LIC. LEONARDO RAMIREZ MURCIA

LIC. SERGIO LUIS RIVERA MARQUEZ

COMUNIQUESE.-----E.S.BLANCO R.-----O.BON.F.-----D.L.R.GALINDO.-----S.L.RIV.MARQUEZ.-  
M.REGALADO.-----P.VELASQUEZ C.-----L.R.MURCIA.-----DAFNE S.-----J.R.ARGUETA.-----  
DUEÑAS.-PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO  
SUSCRIBEN.-S.RIVAS AVENDAÑO.-----"

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes.



DIOS. UNION. LIBERTAD

Lic. María Soledad Rivas de Avendaño

Secretaria General

Corte Suprema de Justicia.

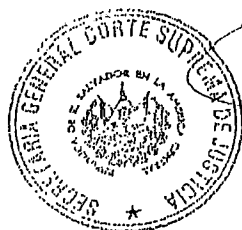
vmv



SECRETARÍA GENERAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
TEL. 2271-8888

*Renuncia de  
D. Sánchez de  
Muñoz.  
Se pide*

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CERTIFICA que en la sesión de Corte Plena celebrada el día cinco de julio de dos mil dieciséis, se tomó el acuerdo que en lo conducente dice: "'''' En otro aspecto, solicita la palabra la magistrada Sánchez de Muñoz para presentar su renuncia a integrar la Comisión de Probidad de esta Corte, quien expresa los retos que representan la Presidencia de la Sala de lo Contencioso para atender la carga ordinaria de la misma, que le dificulta su integración a dicha Comisión. Se solicita se mantenga en la misma, mientras el Pleno no resuelve sobre la conformación. Se refiere que debe de discutirse las reglas de funcionamiento y sus mínimos y máximos. Se llama a votar por aceptar la renuncia de la magistrada Dafné Yanira Sánchez de Muñoz como integrante de la Comisión de Ética y Probidad de esta Corte: ocho votos. "'''' Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser remitida a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, se extiende la presente en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; San Salvador, a los once días del mes de julio de dos mil dieciséis.



*[Signature]*  
Lic. María Soledad Rivas de Avendaño  
Secretaria General  
Corte Suprema de Justicia

SECCION DE PROBIDAD  
RECIBI  
HORA: 2:55 p.m.  
FECHA: 11 JUL 2016

*[Signature]*



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE CORTE PLENA DEL  
VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.**

En el Salón de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas del día veintiocho de julio del año dos mil quince. Siendo éste el día y hora señalados en la convocatoria para celebrar sesión de Corte Plena, se procedió a ello con la asistencia del Magistrado Presidente, doctor José Oscar Armando Pineda Navas, y de los Magistrados: doctores Florentín Meléndez Padilla y José Belarmino Jaime; licenciados Edward Sídney Blanco Reyes, Rodolfo Ernesto González Bonilla y María Luz Regalado Orellana; licenciados Ricardo Rodrigo Suárez Fischner, Doris Luz Rivas Galindo, Sergio Luis Rivera Márquez, Ricardo Alberto Iglesias Herrera, Elsy Dueñas de Avilés y José Roberto Argueta Manzano, y doctores Ricardo Antonio Mena Guerra y Juan Manuel Bolaños Sandoval. I) INFORMES. II) NOTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE FECHA 23 DE JULIO DE 2015, REALIZADA EN EL EXPEDIENTE NUE 69-A-2015 (JC). III) PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE REVOCATORIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA LESVIA ALVARENGA BARAHONA, JUEZA DE INSTRUCCIÓN DE DELGADO. Se da inicio a la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos por parte del Magistrado Presidente, quien da lectura a la agenda del día. Se aprueba agenda con nueve votos. Se instruye trasladar las tres actas pendientes a los despachos de los magistrados presentes, para su aprobación. I) INFORMES. a) Secretaría General informa: a.1) Con instrucciones de Comisión de Abogacía y Notariado se informa que a partir de las reformas a la Ley Orgánica, el examen de notariado debe realizarse una vez al

año y señalarse el período de inscripción para el mes de agosto. Se refiere que este proceso de inscripción es en línea y fue exitoso en el año 2014. Las fechas reservadas para efectuar la prueba son los domingos seis y trece de diciembre de este año, se indican los montos de alquiler de los edificios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de siete mil seiscientos cuarenta y tres dólares con treinta y siete centavos. Se precisa que este año se estarán presentando dos cotizaciones para la impresión y calificación de las once mil hojas, en virtud de los retrasos y deficiencias ocurridas en la oficina a cargo de la UCA. La primera de las cotizaciones es presentada por el Ingeniero Rafael Ibarra, quien desde su empresa ha cotizado por la vasta experiencia que tiene al ser él, la persona encargada de la calificación de la prueba desde el año 2002, falta aún la cotización de la UCA, relativa a la impresión y calificación de Hojas de Examen.

**Se llama a votar por realizar la inscripción en línea del diez al veinticuatro de agosto y la realización de la prueba los días domingo seis y trece de diciembre de dos mil quince: doce votos.** Autorizan con su voto: doctor Mena Guerra, licenciado Suárez Fischner, licenciada Regalado, doctor Jaime, doctor Pineda, doctor Meléndez, licenciado Blanco, licenciado Argueta Manzano, licenciada Dueñas de Avilés, doctor Bolaños, licenciado Rivera Márquez y licenciado Iglesias. a.2) Se ha presentado recurso de explicación por Juan Francisco Cruz Mayorga, profesional del Derecho a quien se le ha suspendido por cinco años en el ejercicio de la función pública notarial. Este caso se conoció en Corte Plena del once de junio dos mil quince y se acordó además la entrega de su Libro de Protocolo vigente, lo cual a criterio del licenciado Cruz Mayorga le

12

produce agravios. Se colocará el día jueves en agenda. a.3) Sobre el punto de agenda relativo al Juzgado de Instrucción de Ahuachapán, en los últimos días se han recibido más de diez escritos del juez suplente en funciones, y de los empleados trasladados y los empleados que se encuentran aún en la sede judicial. Se presentará un punteo oportunamente, porque son varias las peticiones que se están recibiendo constantemente en Secretaría General y en la Presidencia al respecto. Punto queda pendiente. a.4) Informe del juez propietario de Texistepeque sobre los procesos administrativos iniciados a partir de la falta ocurrida en la sede judicial entre la secretaria del tribunal y la citadora, el cual dio lugar a que la Policía detuviera a la citadora y se celebrara una audiencia inicial. El juez ha contestado la nota y dice que ha convocado a todo su personal, les ha advertido que no pueden efectuarse actos que atenten contra la dignidad, las relaciones correctas entre los compañeros o que se afecte a cualquier usuario; les relacionó lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley del Servicio Civil, las sanciones que tiene el artículo 42 de ese mismo cuerpo de ley. Se da lectura a nota. El juez cree que estas dos herramientas pudieran serles útiles, al final de cuentas y de todo lo leído no hay ningún proceso disciplinario abierto por parte de él, porque dice que la conciliación que hubo entre ellas en el campo penal es lo que satisface esta petición que se hiciera de información. Por aparte manifiesta que hay una colaboradora, que es la que se enfrentó con la citadora, que dice que luego de tener esta agresión se comunicó con él por teléfono y le mencionó que sino la sacaba de la Policía, donde la habían llevado detenida, ella iba a plantear una demanda de acoso sexual contra su persona, con el fin de dañar su reputación.

Dice también que al día siguiente recibió una llamada telefónica, señala el número, de una persona que le ha manifestado ser Roswal Solórzano y que es el secretario general de SITTOJ, quien en forma prepotente - lo lee textual-, le propuso que si iniciaba el proceso de destitución de la señora Vilma Yanira Palacios Flores, que es la citadora, por la agresión hecha a la secretaria del juzgado, le iban a denunciar públicamente por acoso sexual ante la Fiscalía General de la República, amenazándole que le iban a incluir dentro de los seis jueces a los que tienen en la mira y, la otra de las amenazas es que trasladara con todo y plaza a la señora Palacios Flores hacia las oficinas de SITTOJ, mientras la Unidad Técnica no la reubicara y que siguiera cobrando con normalidad, como si estuviera laborando en el juzgado y cuando él le expresó que esto no era posible porque se iba a quedar sin notificadora, dice que el señor Solórzano le respondió "este es su costo, señor juez". Situación que manifiesta en nota le preocupa y le indigna, pues ha trabajado con responsabilidad y eficiencia. Él lo que solicita es que se interpongan los buenos oficios a fin de que se le ayude a resolver la problemática de estas amenazas que tiene de parte de SITTOJ. Para la magistrada Rivas Galindo, el juez es conocedor del derecho y de todos los procedimientos disciplinarios, administrativos, como también los judiciales y ellos son los responsables de que el tribunal trabaje de manera adecuada y tomar las medidas que considere pertinentes dentro del marco de la legalidad. Lo que en este momento advierte es que el juez debe saber cuáles son las medidas a tomar, y él debe tomar la dirección del tribunal. b) Magistrada Rivas Galindo: presenta informe sobre necesidades de articulación interinstitucional que deben de trabajarse entre el



sector justicia y específicamente lo relativo al equipo necesario para que los médicos forenses puedan presentarse en las zonas donde se presentan hechos delictivos, así como apoyo de seguridad de trabajo con seguro de vida y otros beneficios. Magistrado Presidente: indica que este día sostendrá reunión con el Fiscal General y solicita este punto de necesidad de trabajo coordinado. c) Magistrada Rivas Galindo: indica que hay varios problemas para atender suplencias ante las convocatorias a capacitación y permisos personales solicitados. Pide se coloque como punto. Magistrado Presidente: delega a la Comisión de Jueces para hacer estudio que permita trabajar una propuesta de pull de jueces suplentes, y se indica que participe la Secretaria General en el análisis.

II) NOTIFICACION DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. Se da lectura a la notificación efectuada el mismo día veintitrés de julio, fecha de proveído. Magistrado Blanco: participa relacionando precedentes de esta Corte sobre el quehacer de Probidad e indica que el proveído en análisis, está trabajado a la luz de una nueva época, con el impulso de una nueva jurisprudencia constitucional y por eso cree que debe aperturarse el contenido de las declaraciones patrimoniales ante el pronunciamiento de una institución competente para ordenar que se entregue la información requerida. Señala en su análisis, lo actuado por la Sección de Probidad, sus limitaciones y sus procesos de multa. Menciona que la sección y su quehacer depende intrínsecamente de lo que decida el Pleno de la Corte, y que la argumentación constitucional es la técnica, la justa y la apropiada para permitir el conocimiento y publicidad y luchar por los enriquecimientos ilícitos. Bajo su análisis hay dos alternativas: atender la

orden emanada por el Instituto o que el Pleno interprete el artículo 240 de la Constitución, para que el patrimonio de los funcionarios públicos sea entregado en una versión pública, aclarando que el Oficial de Información deba de actuar en este sentido, entregando una versión pública del patrimonio del funcionario. Magistrado Jaime: expresa que esta decisión es trascendental por la cantidad de solicitudes que se presentarán, ya que estima que la ocultación de información ha contribuido a la creciente corrupción estatal de los últimos años. Magistrado Iglesias: expresa que siendo un primer caso el que se plantea este día, pide se revise lo que sería la versión pública a entregar, y su sugerencia de que el interesado se pronuncie, no es más que establecer un procedimiento. Magistrada Rivas Galindo indica que no percibe oposición al conocimiento de la declaración patrimonial; sin embargo, considera que el combate a la corrupción es trascendental, pero el proyecto de resolución se conoce hasta este día y que el contexto nacional debe ser considerado como un elemento más. A su criterio hay otros actores de la sociedad, tales como los grandes evasores, que están llevándose la cosa pública, la falta de actualización de los formularios de la sección y la pasividad en su actuación. Magistrado Mena Guerra: considera que no hay espíritu contrario a la transparencia, pero solicita que se incluya en el contenido de la resolución que cada caso deba ser conocido por el Pleno, para que se conozca de la solicitud los elementos indiciarios o motivadores, para pretender a la información patrimonial. Magistrado Iglesias: indica que los motivos o indicios que debe presentar el peticionario ante un requerimiento al Oficial de Información, que propone el magistrado Mena Guerra, está expresamente prohibida en la LAIP.

Magistrado González: señala que tanto las Salas como la Corte Suprema de Justicia han dado grandes avances sobre criterios constitucionales, principios y utilización de tratados, por lo que considera hay que integrar los demás pronunciamientos de avanzada que se han pronunciado en otros temas trascendentales. Magistrado Meléndez: considera que este es un cambio de imagen y de actitud interpretativa que está haciendo el Pleno, por lo que la interpretación evolutiva, sistemática e histórica de la Constitución que tome en cuenta las circunstancias actuales del país para el combate de la corrupción. Estima que no se trata de sacrificar derechos personales de los funcionarios, sino que se debilitan frente al interés público. Sugiere crear algunas salvaguardas para evitar el uso irrestricto sin desnaturalizar la discusión de este día, por lo que puede dejarse a revisión si se trata de una petición "irrazonable", para resolver a partir de esto. Considera que puede trabajarse más completo el proyecto utilizando jurisprudencia de la Sala y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Propone llamar a votar por el sentido de la decisión que tomará la CSJ, quedando pendiente el fortalecimiento del proyecto. Interviene la magistrada Rivas Galindo, expresa que la actuación del Oficial de Información debe cumplir a cabalidad los acuerdos de Corte. Magistrado Suárez: participa que sobre el uso de la información no se ha analizado que el artículo 240 se refiere también que la información solo debe utilizarse para los fines que se determinan, que es para fines de investigación de enriquecimiento ilícito, por eso deben de analizarse los demás usos que se harían de esta información. Magistrado González: considera que el riesgo existe de tener abierta una legitimación para esta información, pero

los tribunales tienen control liminar para ver que procede y que no. Refiere el precedente del IAIP sobre petición de acceso a correos electrónicos. Magistrado Presidente: felicita al magistrado González por la apertura y apoyo a que sea su caso el que permita al Pleno pronunciarse, con la unanimidad que se advierte. **Se llama a votar por ordenar al Jefe de la Sección de Probidad y al Oficial de Información que elaboren una versión pública de la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo Ernesto González Bonilla, suprimiendo los datos confidenciales y privados, y una vez elaborada entregue dicha información al señor Herbert Danilo Vega Cruz; y que con el mismo criterio y modo de proceder deberán de implementarse las solicitudes que con base en el derecho de acceso a la información pública hagan o hayan hecho las personas sobre declaraciones de estado patrimonial de funcionarios, aunque estos ya hayan cesado en sus cargos: catorce votos.** Autorizan con su voto: licenciada Rivas Galindo, doctor Mena Guerra, licenciado Suárez Fischner, licenciada Regalado, licenciado González, doctor Jaime, doctor Pineda, doctor Meléndez, licenciado Blanco, licenciado Argueta, licenciada Dueñas de Avilés, doctor Bolaños, licenciado Rivera Márquez y licenciado Iglesias. Queda pendiente para el día jueves el conocimiento y aprobación del texto de la resolución. III) PROYECTO DE RESOLUCION DE REVOCATORIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA LESVIA ALVARENGA BARAHONA, JUEZA DE INSTRUCCIÓN DE DELGADO. Se analizan los efectos de la decisión del Pleno en materia disciplinaria, plazos para recibir renuncia y otras peticiones laborales, certeza del conocimiento del caso investigado y recursos legales a la

decisión. Se deja constancia del retiro del Pleno del doctor Jaime. Se analiza el recurso de revocatoria interpuesto posteriormente por la licenciada Alvarenga Barahona. Magistrado Iglesias: consulta si se cambia la jurisprudencia para colocar fechas de presentación de renunciaciones. Magistrada Rivas Galindo: indica que es incompatible conocer de la revocatoria y seguir atendiendo lo de la renuncia, porque no tiene sentido dos aspectos separados, ya que en el mismo escrito de revocatoria ella solicita continuar desempeñándose como jueza. Secretaria General: refiere que a la renuncia interpuesta puede dársele respuesta según las consideraciones hechas por el Pleno, en Acuerdo, es decir en resolución separada. Se indica que se trabajará en resolución de revocatoria, el hecho de que en el recurso la misma interesada implícitamente dejó sin efecto la renuncia presentada previamente. **Se llama a votar por declarar sin lugar a la revocatoria interpuesta por la licenciada Lesvia Alvarenga Barahona en el informativo disciplinario 189-2011: nueve votos.** Autorizan con su voto: licenciada Rivas Galindo, licenciado Suárez Fischnaler, licenciada Regalado, licenciado González, doctor Pineda, doctor Meléndez, licenciado Blanco, doctor Bolaños y licenciado Iglesias. Se da por terminada la sesión a las doce horas y cuarenta minutos. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente y se firma.



MEMORÁNDUM  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SECCIÓN DE PROBIDAD



REF-233-2018-SP

PARA : Lcda. Eva Marcela Escobar Pérez  
Oficial de Información del Órgano Judicial

DE : Lic. Carlos Guillermo Quiteño Quintanilla  
Subjefe Sección de Probidad

ASUNTO : Contestando nota

FECHA : 17 de julio de 2018

Con un cordial saludo de mi parte y deseándole éxitos en sus labores diarias. Estimada Lcda. Escobar de Pérez, por este medio y en base a la resolución definitiva, promulgada por el Instituto de Acceso a la Información Pública referencia NUE ACUM-55,82,91,98,162,173, 192 Y 257-A-2016(MV), en donde ordenó la entrega de copias de los exámenes de auditorías de 18 funcionarios y exfuncionarios públicos, adjunto remito 8 resoluciones emitidas por Corte Plena en donde declararon que no existen indicios de enriquecimiento ilícito en relación a las declaraciones patrimoniales presentadas en esta oficina por los señores: Luis Mario Rodríguez; José Belarmino Jaime; Jorge Alberto Pérez Quezada; Jorge Alfonso Quinteros Hernández; Tito Edmundo Zelada Mejía; Eduardo Antonio Urquilla Bermúdez; Nayib Armando Bukele Ortiz; y, Marina de Jesús Marengo de Torrento, las cuales debido a que la Corte Suprema de Justicia resolvió que no existen indicios de enriquecimiento ilícito, goza de la reserva de ley decretada por Corte Plena en resolución de las once horas y treinta minutos del día veinte de junio de dos mil diecisiete. Razón por la cual se entrega las resoluciones finales nada más.

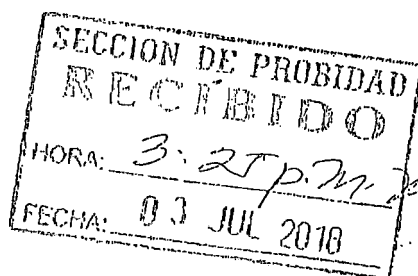
Finalmente, el informe y la resolución final por medio de la cual, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Cámara Ambiental de segunda Instancia el juico por enriquecimiento ilícito en contra del señor Jaime Alberto Rodríguez. Es decir que por este medio remito 9 de las 18 resoluciones que en su momento pidió el IAIP que se entregaran.

Sin otro particular,  
Atentamente.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Nombre:	Carlos G. Quiteño
Fecha:	17 JUL 2018 12:35 pm
[Firma]	



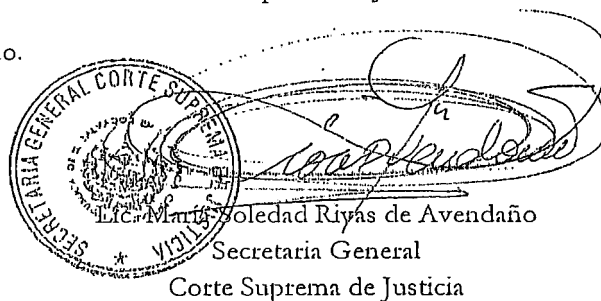
SECRETARÍA GENERAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
TEL. 2271-8888



LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CERTIFICA que en la sesión de Corte Plena celebrada el día tres de julio de dos mil dieciocho, se tomaron los siguientes acuerdos: "I) CASO DOCTOR JOSÉ DOMINGO MÉNDEZ EN EL EJERCICIO DE SU CARGO COMO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Se llama a votar que no existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte del ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor José Domingo Méndez Espinoza, quien fungió en dicho cargo del 29 de julio de mil novecientos noventa y cuatro al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, en relación con las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia: doce votos. Autorizan con su voto los Magistrados: Bonilla, Ramírez Murcia, Regalado, Jaime, Pineda, Meléndez, Blanco, Argueta Manzano, Dueñas, Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez y López Jerez. II) CASO LUIS ENRIQUE CAMPOS DIAZ, EN EL EJERCICIO DE SU CARGO DE CONSEJAL PROPIETARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA. Se deja constancia del reingreso al Pleno de Magistrado López. Se llama a votar por declarar no existen indicios de enriquecimiento ilícito del señor Luis Enrique Campos Díaz, en su calidad de miembro propietario del Consejo Nacional de la Judicatura, en el periodo comprendido del veintidós de septiembre de dos mil diez al veintitrés de septiembre de dos mil quince: doce votos. Autorizan con su voto los Magistrados: Rivas Galindo, Regalado, Jaime, Pineda, Meléndez, Blanco, Argueta Manzano, Dueñas, Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez y López Jerez. III. CASO LEVIS ITALMIR ORELLANA CAMPOS, JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE SAN SALVADOR. Se llama a votar por declarar que no existen indicios de enriquecimiento ilícito del licenciado Levis Italmir Orellana Campos, respecto a su desempeño como Juez de Primero de Instrucción de San Salvador del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de diciembre de



dos mil quince y como Juez Décimo de Instrucción de San Salvador del uno de enero de dos mil dieciséis al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en relación con su declaración patrimonial presentada ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia: nueve votos. Autorizan con su voto los Magistrados: Bonilla, Ramírez Murcia, Regalado, Pineda, Blanco, Argueta Manzano, Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez y López Jerez. ""Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser remitida a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, se extiende la presente en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; San Salvador, a los tres días del mes de julio de dos mil dieciocho.



Lic. María Soledad Rivas de Avendaño  
Secretaria General  
Corte Suprema de Justicia



MEMORANDUM  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SECCION DE PROBIDAD



PARA : Lic. Edward Sidney Blanco  
Magistrado de la Sala de lo Constitucional  
Dr. José Belarmino Jaime  
Magistrado de la Sala de lo Constitucional  
Msc. Leonardo Ramírez Murcia  
Magistrado de la Sala de lo Penal  
Lic. Sergio Luis Rivera Márquez  
Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo  
  
: Lic. Carlos Rafael Pineda Melara  
Jefe de Probidad  
  
ASUNTO : Remisión de Informe Preliminar  
  
FECHA : 14 de junio de 2017

Ref. 240 SP2017

Estimados Magistrados:

Adjunto al presente INFORME PRELIMINAR SOBRE EL ANALISIS DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO PRESENTADAS POR LA SEÑORA ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR en el ejercicio del cargo de Vicepresidente de la República durante el periodo 2004-2009.

Quedo a la espera de incorporar las observaciones que la Comisión de Ética y Probidad pueda realizar.

Atentamente,

*Handwritten:* 17/6/17

*Handwritten:* Celio E  
14/6/17  
3:28 pm

*Handwritten:* 2:36 pm  
14-6-17



MEMORANDUM  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SECCION DE PROBIDAD



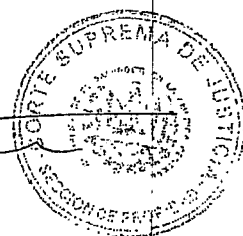
PARA : Lic. Edward Sidney Blanco  
Magistrado de la Sala de lo Constitucional  
Dr. José Belarmino Jaime  
Magistrado de la Sala de lo Constitucional  
Msc. Leonardo Ramírez Murcia  
Magistrado de la Sala de lo Penal  
Lic. Sergio Luis Rivera Márquez  
Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo

: Lic. Carlos Rafael Pineda Melara  
Jefe de Probidad

ASUNTO : Remisión de Informe Preliminar

FECHA : 30 de enero de 2018

Ref.36SP2018



**Estimados Magistrados:**

Adjunto INFORME PRELIMINAR SOBRE EL ANALISIS DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO PRESENTADAS POR EL SEÑOR JORGE ERNESTO HERNANDEZ ISUSSI, en el ejercicio de su cargo de Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, durante el periodo 2004-2009

Quedo a la espera de incorporar las observaciones que la Comisión de Ética y Probidad pueda realizar.

Atentamente,

*Dr. R*

30-01-2018

3:04 pm

*Celicio  
Jefe de Probidad  
3:06 pm*

*[Handwritten signature]*



MEMORANDUM  
CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA  
SECCION DE PROBIDAD



Ref.94/SP72018 lr

PARA : Lic. Edward Sidney Blanco  
Magistrado de la Sala de lo Constitucional  
Lic. José Belarmino Jaime  
Magistrado de la Sala de lo Constitucional  
Msc. Leonardo Ramírez Murcia  
Magistrado de la Sala de lo Penal  
Lic. Sergio Luis Rivera Márquez  
Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo

DE : Lic. Carlos Rafael Pineda Melara  
Jefe de la Sección de Probidad

ASUNTO : Remisión de Informe Preliminar

FECHA : 22-03-2018



Estimados Magistrados:

Adjunto INFORME PRELIMINAR SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO PRESENTADAS POR EL SEÑOR CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, en el ejercicio de su cargo de VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, durante el período 01-06-1999 AL 31-05-2004.

Quedo a la espera de incorporar las observaciones que la Comisión de Ética y Probidad pueda realizar.

Atentamente,

*Licda. Gabriela Delgado*

05/04/18 G1

9:10 am



COPIA

# MEMORÁNDUM

## CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

### SECCIÓN DE PROBIDAD



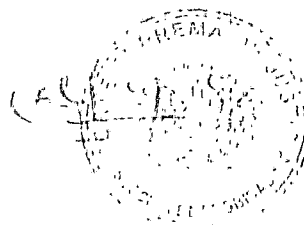
REF-247- 2018-SP

PARA : Lcda. Eva Marcela Escobar Pérez  
Oficial de Información del Órgano Judicial

DE : Lic. Carlos Guillermo Quiteño Quintanilla  
Subjefe Sección de Probidad

ASUNTO : Contestando nota

FECHA : 23 de julio de 2018



Con un cordial saludo de mi parte y deseándole éxitos en sus labores diarias. Estimada Lcda. Escobar de Pérez, por este medio y en base a la resolución definitiva, promulgada por el Instituto de Acceso a la Información Pública referencia NUE ACUM 330-A-2016, 72 al 74, 94 y 99 A-2017, mediante el cual el Instituto emitió resolución definitiva en la que ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CS.J), por medio de la Sección de Probidad que elabore un Plan en el que se establezcan los plazos en los que se practicarán las auditorías de las declaraciones patrimoniales de los siguientes funcionarios públicos: i) de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, período 2009-2014; ii) de los diputados propietarios de Asamblea Legislativa periodo 2012-2015; iii) del cargo del gabinete de gobierno del periodo presidencial 2009-2014; iv) de los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa periodo mayo 2009 a mayo 2012; y, v) de los diputados propietarios y suplentes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN ), periodo de octubre 2011- octubre 2016. Adjunto remito el plan elaborado por esta oficina, en donde se establecen los plazos para la elaboración de las auditorías de los funcionarios y exfuncionarios públicos arriba señalados, que en su oportunidad fueron solicitadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular,  
Atentamente.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	
Nombre: <i>[Firma]</i>	
Fecha: 24 JUL 2018	Hora: 12:40 pm
RECIBIDO	

NUE 2-O-2018 (CE)

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

El presente procedimiento fue asignado al Comisionado Carlos Adolfo Ortega Umaña conforme al Art. 87 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) al finalizar su periodo de nombramiento el 22 de febrero del presente año, el caso se reasignó a la comisionada Claudia Liduvina Escobar Campos.

Lo anterior, en virtud del Acuerdo Ejecutivo N° 104, de fecha 20 de febrero de este año, en el cual consta que a partir del 23 de febrero de este año, el Presidente de la República la nombró como Comisionada Propietaria por el Sector de Sindicatos, Autorizados por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social.

El día veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el denunciado **Carlos Rafael Pineda Melara**, presentó el informe que le fue requerido mediante resolución emitida por este Instituto a las diez horas con ocho minutos del trece de julio de dos mil dieciocho, conforme lo establece el art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). A dicho informe adjuntó:

- a) Copia del Acuerdo N°55-C del ocho de enero de dos mil dieciséis, en el cual se detallan las comisiones de los Magistrados;
- b) Certificación emitida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, en el cual consta la aceptación de la renuncia de la magistrada Dafne Yanira Sánchez de Muñoz como integrante de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte;
- c) Copia simple de Acta de sesión de Corte Plena del veintiocho de julio de dos mil quince;
- d) Copia del memorándum dirigido a la Oficial de Información de parte del Subjefe de la Sección de Probidad, de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho;
- e) Certificación emitida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, en el cual consta las votaciones realizadas por los Magistrados en las que determinaron que no existen indicios de enriquecimiento ilícito

de los funcionarios José Domingo Méndez- ex presidente de la Corte Suprema de Justicia 29/7/1994-30/6/1997-, Luis Enrique Campos Díaz- Consejal propietario del Consejo Nacional de la Judicatura 22/9/2010-23/9/2015-, y Levis Italmir Orellana Campos- Juez de Instrucción de San Salvador 4/5/1998-31/12/2015 y como Juez Décimo de Instrucción de San Salvador 1/1/2016-30/9/2016-;

- f) Copia de memorándum dirigido a Lic. Edward Sindey Blanco y Dr. José Belarmino Jaime- Magistrados de la Sala de lo Constitucional-, Msc. Leonardo Ramírez Murcia- Magistrado de la Sala de lo Penal-, y Lic. Sergio Luis Rivera Márquez- Magistrado de la Sala de lo Contencioso-, de parte del Jefe de la Sección de Probidad, de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, en el cual remite el informe preliminar de las declaraciones juradas de patrimonio de la señora Ana Vilma Albanez de Escobar, en el ejercicio del cargo de Vicepresidenta de la República para el período 2004-2009;
- g) Copia de memorándum dirigido a Lic. Edward Sindey Blanco y Dr. José Belarmino Jaime- Magistrados de la Sala de lo Constitucional-, Msc. Leonardo Ramírez Murcia- Magistrado de la Sala de lo Penal-, y Lic. Sergio Luis Rivera Márquez- Magistrado de la Sala de lo Contencioso-, de parte del Jefe de la Sección de Probidad, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, en el cual remite el informe preliminar de las declaraciones juradas de patrimonio del señor Jorge Ernesto Hernández Isussi, en el ejercicio del cargo de Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador durante el período 2004-2009;
- h) Copia de memorándum dirigido a Lic. Edward Sindey Blanco y Dr. José Belarmino Jaime- Magistrados de la Sala de lo Constitucional-, Msc. Leonardo Ramírez Murcia- Magistrado de la Sala de lo Penal-, y Lic. Sergio Luis Rivera Márquez- Magistrado de la Sala de lo Contencioso-, de parte del Jefe de la Sección de Probidad, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en el cual remite informe preliminar de las declaraciones juradas de patrimonio del señor Carlos Quintanilla Schmidt, en el ejercicio del cargo de Vicepresidente de la República para el período 1/6/1999 al 31/5/2004;
- i) Copia de memorándum dirigido a Oficial de Información del Órgano Judicial, de parte del Subjefe de la Sección de Probidad, en el cual se remitió el plan de plazos para practicar auditorías.



En el presente proceso, el Instituto decidió iniciar de manera oficiosa un procedimiento sancionatorio en contra del señor Pineda Melara, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por el posible cometimiento de la infracción grave contemplada en el art. 76 letra c) de la LAIP, consistente en “*no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto*”, ya que en los procesos NUE ACUM 55, 82, 91, 98, 162, 173, 192 y 257-A-2016 y NUE ACUM 330-A-2016, 72 al 74, 94 y 99-A-2017 no se otorgó la información que se solicitó.

Ahora bien, a efecto de emitir una resolución al respecto habrá que realizar un análisis sobre la procedencia del mismo en el siguiente orden: (I) Consideraciones sobre el procedimiento administrativo sancionador que tramita este Instituto; (II) Los efectos del silencio administrativo; y (III) La ley aplicable y resolución del proceso.

(I) Los procedimientos administrativos sancionadores pueden iniciarse de oficio o por denuncia ciudadana, según como lo disponga el ordenamiento jurídico aplicable. En ese sentido, según lo estipulado en el art. 78 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP), habilita que los procedimientos sancionatorios se puedan iniciar de oficio o mediante denuncia de cualquier persona.

Sobre ello, resulta oportuno aclarar que el Derecho Administrativo Sancionador, como toda rama del derecho, se guía por una serie de principios que constituyen un criterio informador de la actividad de la Administración Pública relacionado al poder punitivo del Estado. En este sentido, se puede hablar del Derecho Penal como elemento integrador del Derecho Administrativo Sancionador; es decir, la ausencia de un ordenamiento penal administrativo no debe interpretarse como una puerta abierta para la aplicación libre y arbitraria de las facultades sancionadoras; por lo que, las aplicaciones supletorias de los principios básicos del Derecho Penal sirven como garantía o límite en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora.

Así, la sanción administrativa constituye un acto de gravamen que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, mediante la privación de un derecho, como prohibición de una determinada actividad, denominada sanción *interdictiva*, o a través de la imposición de un deber económico antes inexistente -sanción *pecuniaria*-.

Entre los derechos que adquieren relevancia en este proceso se menciona el de defensa y seguridad jurídica, ambos relacionados a la imputabilidad, los cuales implican una referencia

ineludible a la prohibición del criterio de responsabilidad objetiva, es decir, que la activación del Derecho Administrativo Sancionador, así como el Derecho Penal, debe responder a un principio de responsabilidad subjetiva, la cual deberá relacionarse a las acciones de desvalor que configuren el supuesto de hecho. Para ello, se deberá relacionar la infracción cometida con la voluntad del presunto infractor, a fin de poder determinar la responsabilidad que se le imputará.

Adicionalmente, es importante traer a colación el principio de legalidad, dentro del cual existe el sub principio de tipicidad, a partir del cual, es necesario la realización de un “*juicio de tipicidad*”, referente a la estricta adecuación de la conducta prohibida descrita en el tipo previamente establecido en la Ley, con el hecho cometido por acción u omisión objeto de sanción. Una vez configurado lo anterior, como parte del ejercicio inherente a la tipicidad, debe adecuar las circunstancias objetivas y personales determinantes del ilícito al supuesto de hecho establecido por la norma, de tal manera que la aplicación de sanciones no es una potestad discrecional de la Administración, sino una debida aplicación de las normas pertinentes que exige certeza respecto a los hechos sancionados. En otras palabras, no podrá haber sanción si la conducta atribuida al sujeto no puede ser subsumida en la infracción contenida en la norma.

Finalmente, el art. 76 de la LAIP menciona cuales son las infracciones a las obligaciones que estipula la referida ley, clasificándolas en muy graves, graves y leves. En ese sentido, este Instituto tiene el propósito de identificar y definir la responsabilidad en la que puedan recaer los servidores públicos que infrinjan tales disposiciones.

(II) Tal como se ha mencionado anteriormente, el presente proceso inició de manera oficiosa por el Instituto de conformidad con la resolución emitida a las diez horas con ocho minutos del trece de julio de dos mil dieciocho. En ese sentido, el informe de defensa fue presentado por el señor Carlos Rafael Pineda Melara el día veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, estando dentro del plazo que establece el art. 88 de la LAIP. Sin embargo, a la fecha el Pleno no ha emitido resolución alguna respecto a lo manifestado por el denunciante en dicho informe, habiendo transcurrido más de ocho meses desde la presentación del mismo.

En ese sentido, es importante hacer referencia a qué se entiende por silencio administrativo y cuáles son los efectos del mismo. La Sala de lo Constitucional en Sentencia de las nueve horas del día siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, pronunciada en el proceso de Amparo con referencia 159-98 menciona lo siguiente: “(...) *La figura del silencio*

*administrativo surge como un medio de defensa del administrado frente a la pasividad y/o demora de la Administración. En ese sentido, el silencio administrativo constituye una presunción legal ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa; es decir, la Ley sustituye por sí misma esa voluntad inexistente, presumiendo que a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o estimatorio. Y es que, la Administración está obligada a pronunciar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados, debiéndolo hacer en el plazo máximo establecido por la ley para cada trámite; caso contrario -si la Administración no dicta resolución expresa en el plazo de cada caso aplicable- se produce un acto presunto, cuyos efectos jurídicos serán los de entender estimada la solicitud en unos supuestos -silencio positivo- o desestimadas en otros - silencio negativo-. En ambos casos, pues, el mero transcurso del plazo para resolver, produce un auténtico acto administrativo. Ese acto presunto, positivo o negativo, estimatorio o desestimatorio, que se produce al vencimiento del plazo para resolver y por el mero transcurso del mismo sin que la resolución se produzca, tiene en todo caso el mismo valor que correspondería a dicha resolución; por lo que puede hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada (...)"*

En ese sentido, el silencio administrativo empieza a producir efectos cuando ha transcurrido el plazo que la ley ha estipulado para realizar un trámite y no se emite de parte de la Administración Pública una resolución en dicho período. La finalidad de dicha figura es brindar seguridad jurídica al presunto infractor que en un determinado plazo se resolverá sobre si efectivamente se ha cometido una infracción o si no se reúnen los requisitos que la ley establece, absolviendo en ese caso al denunciado. Adicionalmente, el silencio administrativo, en el ámbito de los procesos sancionatorios, funciona como una garantía, ya que no se mantienen activos indefinidamente dichos procesos, obligando a la Administración a que en un plazo determinado emita una respuesta sobre la existencia o no de una infracción legal, imponiendo la sanción que corresponda.

(III) De conformidad con lo consignado en el art. 15 de la Constitución y al principio de seguridad jurídica, un proceso debe resolverse de conformidad con las normas que se han dictado previo a la conducta realizada y que se encuentren vigentes al momento que éste suceda. Ahora bien, en el presente caso el cual inició el 13 de julio de dos mil dieciocho, las normas administrativas que se encontraban vigentes son las Disposiciones Transitorias del Procedimiento

Administrativo y del Régimen de la Administración Pública (DTPARAP)<sup>1</sup> y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA)<sup>2</sup>, las cuales entraron en vigencia el 31 de enero de 2018, así como la LAIP. En ese sentido, en virtud que ambas disposiciones normativas se encontraban vigentes al momento que se dio inicio al proceso administrativo sancionatorio que nos atañe, éstas conformaran el marco normativo sobre el cual se emitirá la resolución.

En ese contexto, resulta importante mencionar algunos antecedentes de las DTPARAP, a fin de enmarcarlo dentro del presente proceso. Según el tercer considerando de dicho cuerpo normativo, la finalidad de la misma es brindar disposiciones transitorias que sean vigentes mientras no se adopte una ley general de los procedimientos administrativos. Por ello, en los procesos administrativos iniciados después del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y antes del trece de febrero de dos mil diecinueve- fecha de entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos- se aplicarán las presentes disposiciones transitorias.

Ahora bien, el art. 5 de las DTPARAP establece que los procedimientos administrativos deberán concluirse por acto o resolución final en un período de noventa días posteriores a su inicio, ya sea de oficio o a petición de interesado. En relación con lo estipulado en la misma, el art. 7 de dicho cuerpo normativo, desarrolla los efectos que puede generar el silencio administrativo por inobservar el plazo antes mencionado en los procedimientos iniciados de oficio. En ese sentido, el art. 7 estipula que a pesar de haber transcurrido dicho período, no exime a la Administración Pública de la obligación de emitir una resolución sobre el objeto del proceso. Asimismo, se regula que en los casos que inician de oficio ante la Administración Pública, si transcurre el plazo estipulado, y el procedimiento sea en el ejercicio de la potestad sancionatoria o una intervención que pueda producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

Aplicando dichas disposiciones al presente proceso, se verifica que se cumplen los dos supuestos que menciona el referido art. 7: (i) han transcurrido más de noventa días desde el inicio del proceso sin que se haya resuelto el objeto del mismo; y (ii) es un procedimiento que se ha iniciado de oficio en el cual se ejerce la potestad sancionatoria de la Administración Pública. En

---

<sup>1</sup> Publicado en el Diario Oficial N°209, Tomo N°417, del 9 de noviembre de 2017

<sup>2</sup> Publicado en el Diario Oficial N°209, Tomo N°417, del 9 de noviembre de 2017

26

consecuencia, y de conformidad con lo estipulado en las disposiciones antes mencionadas, es procedente declarar la caducidad del presente proceso y archivar el expediente.

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, además de los artículos 15 de la Constitución; 76, 94, 96 y 102 de la LAIP, art. 78 del RELAIP, arts. 5 y 7 de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración Pública, este Instituto **resuelve:**

a) **Declarar la caducidad** del presente proceso sancionatorio iniciado de oficio por parte del Instituto en contra del señor **Carlos Rafael Pineda Melara**, por la presunta infracción grave establecida en el art. 76 letra c) referente a *“no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto”*.

b) **Archivar** definitivamente el presente expediente.

**Notifíquese.-**



**PRONUNICADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA  
SUSCRIBEN**

AT/RP



Xenia Tamayo &lt;xtamayo@iaip.gob.sv&gt;

**JE 2-O-2018 NOTIFICACIÓN**

Notificaciones | IAIP &lt;notificaciones@iaip.gob.sv&gt;

6 de junio de 2019, 12:15

Para:

**Carlos Rafael Pineda Melara**  
Presente.




Buenas tardes:

Remito notificación en relación al caso NUE 2-O-2018.

**SE SOLICITA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTE CORREO.**

**Nota:** Toda la documentación presentada a este Instituto por medios electrónicos debe ser remitida a la dirección: [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv), caso contrario se tendrán por no recibidos.

**José Hernández**  
**Notificador Interino**  
**Unidad de Derecho de Acceso a la Información**  
Tel.: (503) 2205-3800  
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88,  
edificio Oca Chang, segundo nivel, San Salvador, El Salvador.  
Correo Electrónico: [xtamayo@iaip.gob.sv](mailto:xtamayo@iaip.gob.sv)

Visítanos en:   *"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario"*Remitente notificado con  
Mailtrack**Caducidad certificada.pdf**

245K